



La consulta plantea, dos cuestiones relacionadas con la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

La primera cuestión alude al plazo de conservación de las imágenes, más concretamente sí la aprobación del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se desarrolla la Ley Orgánica ha modificado el plazo de 1 mes de conservación de las imágenes.

Según la disposición derogatoria única del Real Decreto 1720/2007, “quedan derogados el Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal y todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto”.

El artículo 6 de la instrucción 1/2006, donde se regula el plazo de conservación de las imágenes está íntimamente relacionado con lo dispuesto en el artículo 4.5 de la Ley Orgánica 15/1999 que señala lo siguiente “Los datos serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.”, dicha previsión se reitera en el artículo 8.6 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica. El criterio de la Agencia atendiendo a dicho principio ha sido entender que las imágenes grabadas para cumplir con la finalidad de seguridad, deben de conservarse como máximo durante un mes, una vez cumplida dicha finalidad, éstas deben de cancelarse. Por lo que dicho plazo sigue vigente tras la entrada en vigor del Reglamento dado que no se opone a las previsiones contenidas en el mismo.

A mayor abundamiento es preciso destacar que el plazo de un mes que en la Instrucción se establece para cancelar las imágenes, no es arbitrario, dado que se ha optado por seguir el mismo criterio que el fijado en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos, que en su artículo 8 señala que “Las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación”.

Por otro lado la instrucción señala expresamente en el artículo 6 que “los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su

captación”, quiere esto decir que una vez transcurrido dicho plazo las imágenes deberán de ser canceladas, lo que implica el bloqueo de las mismas pues así lo establece, la Ley Orgánica 15/1999 que en el artículo 16.3 señala que “la cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión”.

A continuación analizaremos las medidas de seguridad que deben adoptarse en los ficheros de videovigilancia.

Según establece el artículo 1 de la Instrucción 1/2006, que delimita el ámbito de aplicación de la misma “La presente Instrucción se aplica al tratamiento de datos personales de imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras.”

Asimismo el artículo 81 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se desarrolla la Ley Orgánica establece que “Todos los ficheros o tratamientos que contengan datos de carácter personal deberán adoptar las medidas de seguridad calificadas como de nivel básico”.

Dado que los únicos datos objeto de tratamiento son las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia y la finalidad del tratamiento es la seguridad, el tratamiento de las imágenes no encaja en las previsiones contenidas en los apartados segundo y tercero del artículo 81 del Real Decreto 1720/2007, que son las que determinan cuando nos encontramos en presencia de un fichero que deba de adoptar medidas de seguridad de nivel medio o alto.

En consecuencia los ficheros de imágenes captadas por sistemas de videovigilancia con fines de seguridad, deberán adoptar medidas de seguridad de nivel básico.

El tratamiento de las imágenes para la investigación y persecución de un delito lo efectuará o el órgano judicial competente o la policía en su caso, pudiendo basarse dicho tratamiento en las imágenes que le haya cedido la consultante. La policía o el órgano judicial como cesionarios de dicho ficheros deben de cumplir con todas las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, así lo dispone el artículo 11.5 de la citada Ley, por lo que el fichero de imágenes del que sea responsable la policía, o el órgano judicial competente, sí deben de adoptar medidas de seguridad de nivel alto en virtud del artículo 81.3 del Real Decreto 1720/2007 que señala “Además de las medidas de seguridad de nivel básico y medio, las medidas de nivel alto se aplicarán en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal: b) los que contengan o se



refieran a datos recabados para fines policiales sin el consentimiento de las personas afectadas.”